

mez Farias, violándose, segun alega el promovente, las garantías individuales que otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitución federal. Visto el informe de la autoridad responsable del acto que se reclama, de cuyo documento y justificantes aparece: que denunciado un tesoro en dichas ruinas por el C. Refugio Diaz, y llenado por este los requisitos legales para buscarlo, se previno al quejoso por un auto del Juez á que se refriere, que suspendiera los trabajos de escabacion que él habia emprendido, dejando libre la accion del denunciante, hasta que en caso de resistencia se verificase al juicio respectivo, vigilando la policía el cumplimiento de la suspension prevenida. Visto el pedimento del Promotor Fiscal, sosteniendo la improcedencia legal del recurso intentado, y la sentencia del Juez de Distrito que deniega el amparo, con todas las demas constancias convenientes. Considerando: primero; que el auto reclamado no importa violacion del artículo 16, por que supuesta la cuestion entre Diaz y Miravete sobre la escabacion en busca del tesoro y sobre los incidentes ocurridos, aquel acto ó sea disposicion del Juez ante quien se llevó la cuestion, es de autoridad competente que funda y motiva la causa legal del procedimiento. Segundo; que tampoco hay violacion del artículo 27, por cuanto á que, no se ha dispuesto de la propiedad por el auto citado.—En virtud de las razones anteriores y de conformidad con lo prescrito por la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Guadalajara, pronunciada en esta ciudad á 21 de Junio último, en la cual declara: que la justicia de la Union no ampara ni protege al C. Ramon Miravete como encargado autorizado del C. Farias, que ha originado el nuevo recurso de amparo.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó en revision acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos correspondientes; publíquese

por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—Jose Arteaga.—Petro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Aza.—Simon Guzmán.—Luis Velasquez.—José García Ramirez.—Enrique Landa.—oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Julio 21 de 1873.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por el C. Fernando Gomez Virgen, contra el acuerdo de la asamblea municipal de aquella ciudad por el que se le destituyó de médico de la municipalidad y administrador de la vacuna.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El promotor fiscal dice: que en 4 del actual se presentó el C. Dr. Fernando Gomez Virgen, por medio del ocurso de la misma fecha exponiendo: que hace cinco años que le fué conferido el nombramiento de médico de esta municipalidad y administrador de la vacuna, cuyo empleo ha desempeñado con todo el esmero y eficacia que le ha sido posible, hasta el dia primero del presente mes, el que el C. Cruz García Rojas, actual gefe político del partido le impuso la pena de privacion ó suspension indefinida de aquel empleo, como consta de la comunicacion número 1; y lo que motivó la aplicacion de esta pena, fué que habiéndose

solo prevenido por el C. García Rojas, en su comunicacion número 2 de 31 de Mayo, que inmediatamente le informase del estado en que se encontró la salubridad pública durante el dicho mes, y le contestó en los términos en la copia número 3, demostrándole que le era imposible rendir inmediatamente el informe que se servia pedirle; pero calificada de irrespetuosa por dicho jefe político, puesto que en su oficio de primero del corriente motiva la pena que le impuso, expresando que no puede permitir el lenguaje desconocido ó impropio en que aquel está concebido; y aunque puede ser que haya empleado términos que no sean de la mas completa sumision, sin mas que con el objeto de conservar incólume la dignidad individual, y puede ser tambien que el C. jefe político haya sido demasiado severo en su calificacion, pues es público en esta ciudad que al advenimiento al puesto que hoy ocupa, habian precedido algunos antecedentes que lo tenían indispuerto con su persona; pero que sea de esto lo que fuere, el hecho capital ó inegable á que se refiere en su presentacion es el de habérsele aplicado por el Sr. García Rojas, la pena de destitucion ó suspension indefinida del empleo de médico de la municipalidad y administrador de la vacuna; y como con este hecho se ha violado una de las garantías individuales que protege la Constitucion general de la República, que ratifica y sanciona la particular del Estado en su artículo primero, se vé en el caso, usando del derecho mas legítimo de ocurrir á la justicia federal pidiendo amparo contra la determinacion de la gefatura política que le impone la pena referida, pues con ella se ha violado la garantía del artículo 21 del Pacto fundamental de la República, que establece "que la aplicacion de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial;" cuya determinacion absoluta y caracterizada por el adjetivo "exclusiva" es como el corolario del otro principio fundamental consignado en el artículo 50 de dicho

código: "El Supremo Poder de la federacion, se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial; nunca podrán reunirse dos ó mas de estos poderes en una sola persona ó corporacion, ni depositarse el legislativo en un individuo;" y será delincuenta si se quiere, pero la pena que deba aplicársele solo puede serlo por el poder judicial, como lo dicen las mas elementales nociones de derecho criminal; que es ademas tan grave que produce el doble efecto de atacar ó perjudicar los intereses del individuo á quien se le priva de la honesta ganancia que su empleo le procura y atacar tambien su honor por la nota que imprime al que se le impone de ser inepto ó infiel en su desempeño; y que á reserva de desarrollar los puntos de derecho que en esta cuestion se tratan, dice: que no se le ha privado de su empleo como principio de un proceso judicial, que se instuya en su contra para juzgarlo por la falta ó delito que le atribuye el C. jefe político, sin que pueda estimarse como una de aquellas advertencias ó correcciones que caben en sus facultades, sino que ha sido verdaderamente pena y resolucion definitiva contra la que no le queda mas que el recurso de amparo. Alega ademas, que el reglamento económico político de los Partidos del Estado, vigente, no otorga al C. Jefe político la facultad de imponer la pena de que se queja; y aunque así fuera y que en virtud de esa ley ó de cualquiera otra del Estado, lo hubiera castigado con la privacion del empleo, no por eso sería menos procedente y eficaz el amparo contra la ley misma y contra el acto reclamado, por que no pierde su carácter anticonstitucional: que por otra parte, la suspension de la ejecucion de la pena que se le ha impuesto es punto de la mayor importancia y urgencia, pues hiere su reputacion y honor á causa de la publicidad que tendrá el negocio, por el hecho de que la sociedad lo vea separado de su empleo, sabiendo que es por pena fulminada por la autoridad política; despues no le sería posible obtener

una reparacion tan intensa y competente, como el dafio que sufrió en su honra; por lo que suplica al Juzgado, se sirva de conformidad con el artículo quinto de la ley de 20 de Enero de 1869, decretar la suspension del acto reclamado; y que sin ocuparse de demostrar que no ha cometido ninguna falta que lo haga acreedor á un castigo de cualquiera especie, no siendo el punto que deba ventilarse en este juicio, ni ser la accion que ejercita, y que el amparo procede por no tener el C. Gefe político autoridad judicial para imponerle la pena que ha dictado en su contra, y por lo mismo, aunque fuera delincuente, no por eso deja de violarse la garantía que le otorga el artículo 21 de la Constitucion general, pues como puede comprenderse, esa garantía tiene el objeto secundario de que en materia penal disfruten los acusados ante la autoridad judicial de las demas que consignan los artículos del 18 al 24, de las que se venian privados siempre que se les impusiera un castigo por una autoridad incompetente en la forma que lo ha hecho la Gefeatura política; concluyendo con que su queja se funda en la fraccion primera artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869: que el hecho que la motiva es el de haberse violado la garantía citada antes, al imponérselo la pena de suspension indefinida de su empleo; por lo que suplica que sustanciando el juicio por todos sus trámites legales, se declare en nombre de la Justicia de la Union que se le ampara y protege contra el acto reclamado.

Suspense dicho acto por auto del dia cinco, de conformidad con los artículos quinto, sexto y noveno de la ley citada, se mandó comunicar la providencia á la autoridad responsable y se le remitiera copia del ocursu del quejoso para que, dentro de tercero dia informara sobre su contenido, corriéndose despues traslado al que suscribe para que pida sobre lo principal; y evacuando el informe del C. Gefe político en 7 del corriente, manifestó: que es cierto que suspendió á D. Fernando Gomez Virgen, del em-

pleo de médico de la municipalidad, por haberse negado en términos irrespetuosos, á dar el informe que se le pidió sobre el estado que guardaba la salubridad pública en el mes de Mayo anterior, providencia que cree haber podido dictar conforme á sus atribuciones, como puede dictarla respecto de cualquiera otro empleado de municipalidad que no cumpla con sus deberes; y si en esa determinacion hubo ó no exceso, el Supremo Gobierno del Estado ó la asamblea municipal que hizo directamente el nombramiento del Sr. Gomez Virgen, son en su concepto los que pueden y deben calificar la conveniencia ó justicia de la suspension ó remocion de sus empleados, como ya ha hecho la asamblea destituyendo al citado médico por ineptitud; pues no siendo propiedad de nadie los empleos públicos cuya duracion ninguna ley garantiza no alcanza á comprender que tengan que ver las garantías individuales con la libre remocion y nombramiento de empleados de la municipalidad, independiente en administracion y manejo de sus intereses; y no es, pues, cierto que su autoridad haya impuesto una pena al médico D. Fernando Gomez Virgen, pues ni siquiera ha tenido intencion de imponérselo, no obstante haber habido lugar á ello si tal hubiera querido, pues el artículo 67 del reglamento económico político, faculta á la autoridad para hacerlo; y si se ha suspendido al Sr. Gomez Virgen, como á un empleado que no desempeñaba cumplidamente sus deberes, mientras daba cuenta á quien podia reponerlo ó destituirlo, como libre que es la asamblea en el nombramiento de sus empleados; por lo que el Juzgado, cuya imparcialidad y justificacion sabrá calificar las pretenciones del Sr. Gomez Virgen, y conciliar lo que piden las garantías individuales y las leyes sus protectoras, con lo que tambien exige la independencia de los Estados, la soberanía de las entidades federales y la libre administracion y régimen municipal, pues todo ello está bajo la égida de la Suprema Corte de

Justicia que debe calificar en último término la aplicación de las leyes Constitucionales.

En 5 del presente compareció el C. Dr. Gomez Virgen y expuso: que con fecha 4 entabló juicio de amparo contra la orden del C. Cruz García Rojas, jefe político de ese Partido, fecha 19 de este mes, por la que le impuso la pena de suspensión indefinida de su empleo de médico de la municipalidad y administrador de la vacuna que sirve hace tres años, importando esa orden una violación del artículo 21 de la Constitución general; y que admitido legalmente el recurso, se le notificó el auto por el que se suspendían provisionalmente los efectos de aquella orden y se mandaba lo relativo á la suspensión del juicio; pero que después de diligenciado el auto, recibió á las once de la mañana del día 5 la nueva comunicación que original acompaña, firmada por el mismo jefe político con fecha del 4, transcribiéndose en ella un acuerdo de la asamblea municipal, tenido en sesión extraordinaria, el que le impone definitivamente la grave é infamante pena de destitución de su empleo: que á los ojos menos perspicaces se manifiesta, que todo ello no es mas que un expediente con que el jefe político, persuadido de la ilegalidad de sus actos, al imponerle por sí la pena de suspensión y de responsabilidad que le ocasiona, previendo el resultado de su queja, ha querido decolinar esa responsabilidad en la dócil Asamblea Municipal, aspirando también aunque inútilmente á que la violación de los preceptos constitucionales quede encubierta tras un simple acuerdo de los CC. Munícipes, sin que con tal conivención puedan enervarse las determinaciones judiciales y desbaratarse el recurso de amparo que le franquea la ley de 20 de Enero de 1869, pues estando reintegro el negocio, tiene el derecho de amplexarla ó modificarla; pero como ha perdido ese carácter por lo avanzado de su tramitación está en la necesidad de entablar un nuevo juicio de amparo contra el

acuerdo de la Asamblea Municipal, contenido en la comunicación que acompaña, siendo el punto que lo motiva mas claro que el anterior; porque en aquel se trataba de una suspensión indefinida y en esta se trata de una destitución formal y definitiva impuesta expresamente como pena de las faltas que le atribuyen; y como no es la ocasión de defenderse de ellas, para demostrar que no las ha cometido, su objeto es implorar el amparo de la Justicia Federal, para que no se conculquen en su persona las garantías que asegura el Código fundamental de la República; y conforme á lo que manda en su artículo 21 "la aplicación de las penas propiamente tales, es facultad exclusiva del poder judicial; por lo que ni el jefe político ni la Asamblea Municipal, en que no recae jurisdicción de ninguna especie, no han podido fulminar en su contra la infamante pena de destitución de empleo; si es culpable y merecedor de una pena mas grave, su imposición ó aplicación está reservada exclusivamente á la autoridad judicial, y cualquiera que lo haga, viola ipso facto las garantías individuales, estando ya declarado de una manera auténtica por el Gobierno general en disposición debidamente promulgada "que toda orden, ley ó decreto de cualquiera autoridad que ataque las garantías individuales, es un atentado contra la Constitución, que hace responsable á su autor;" y que antes de concluir, pide se manden suspender los efectos del acuerdo á que se refiere, notificándolo al jefe político que es el ejecutor del acto reclamado; y en resumen fija los siguientes puntos: Primero: Su queja se funda en la fracción primera del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869. Segundo: El hecho que la motiva es el de habérselo impuesto por la Asamblea Municipal en acuerdo privado y sin su audiencia, la pena grave é infamante de destitución de empleo. Tercero: La garantía que considera violada es la que otorga el artículo 21 de la Constitución general.

Decretada en la misma fecha la suspension provisional del acto reclamado, de conformidad con los artículos quinto, sexto y noveno de la ley orgánica, se mandó comunicar la providencia al C. jefe político de la Capital, como autoridad ejecutora del acto reclamado, y remitiéndose copia del escrito del C. Gomez Virgen, para que en el término de tres dias informara con justificación sobre su contenido, corriéndose en seguida traslado al que suscribe, para que pida sobre lo principal. Evacuado el informe del C. jefe político, exponer que dada cuenta á la Asamblea Municipal del oficio del Juzgado, fecha cinco, en que se le trascribe el auto proveído en la solicitud de D. Fernando Gomez Virgen, sobre que se le ampare contra el acuerdo de la referida asamblea, que lo destituyó del destino de médico de la municipalidad, y con consentimiento y aprobacion de la corporacion, rinde el informe siguiente: que por la comunicacion que original ha presentado el Sr. Gomez Virgen, y se menciona en la determinacion del Juzgado, se ve que la Asamblea ha destituido de su empleo al quejoso; y suponiendo que lo haya hecho sin causa, ninguna ley, doctrina ni convenio ha violado la corporacion por no haber la que le garantiza la perpetuidad de su destino, y que la cita del artículo 21 de la Constitucion general que invoca el Sr. Gomez Virgen, interpretado como aparenta entenderlo, nos llevaria al absurdo de que ninguna autoridad ni corporacion pudiera remover un mal empleado, sea cual fuere la falta que cometiere sin ocurrir al Juzgado, para por via de pena lo reparara en el servicio; reasumiendo su informe con las siguientes proposiciones; primera: que la Asamblea Municipal ha destituido al médico D. Fernando Gomez Virgen, en uso de su derecho y de su libre administracion, á uno de sus empleados que ella nombra libremente y puede tambien remover libremente; segunda: tal hecho no importa una pena de las que son exclusivas de la autoridad judicial, si bien

algunas veces podrá ser un castigo, por falta de las obligaciones de su empleo; tercera: no teniendo propiedad el Sr. Gomez Virgen en el destino, y no habiendo ley ni convenio que le garantice la duracion de él por término fijo, ningun derecho ni garantía se le ha violado; cuarta: de consiguiendo el amparo que por tal motivo se le concedeira, sería torturar la Constitucion, y flagrantemente abuso de la ley de amparo; pero como no es de esperarse tal resultado de la cordura é ilustracion del Juzgado, concluye pidiendo en nombre de la Asamblea, se imponga la multa de la ley al Sr. Gomez Virgen, por su temeridad de abusar de un recurso tan privilegiado y benéfico que vendrá á caer en desprecio, si no se aplica con la circunspeccion que exige su elevado objeto.

Por todo lo expuesto, y vistos los artículos 75 y 76 de la Constitucion particular del Estado y las fracciones 7ª y 9ª del artículo 30 del Reglamento económico político de los Partidos del Estado de primero de Mayo de 1869, el Promotor fiscal entiende, que no hay violacion de la garantía que otorga el artículo 21 de la Constitucion general, en que funda sus solicitudes expresadas el C. Fernando Gomez Virgen, contra el acto del C. jefe político del Partido que lo suspendió del empleo de médico de la municipalidad y administrador de la vacuna, y contra el que, cumpliendo con el acuerdo de la Asamblea Municipal, le notificó la destitucion de dicho empleo en virtud de sus facultades, y conforme con los artículos 75 y 76 de la Constitucion del Estado, que segun el primero "ningun empleo público es propiedad del individuo que lo sirve sino puramente encargo ó comision que durará el tiempo que lo desempeñe;" y el segundo dice: "que entre el estado y el empleado que lo sirve hay solo mútua obligacion de que éste pague y aquel sirva, y cesando el servicio cesa la obligacion de pago;" por lo que pide, se declare de conformidad con las disposiciones de la ley orgánica, que

no ha lugar al amparo solicitado últimamente por el C. Doctor Fernando Gomez Virgen; y de conformidad también con la disposición de la parte final del artículo 16 de la citada, se imponga la multa en que ha incurrido por lo inmotivado de sus solicitudes. Así lo cree de derecho y justicia.—*Zacatecas, 14 de Junio de 1872.—Jesus M. Licea.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, Junio 28 de 1872. Visto el juicio de amparo promovido por el Dr. D. Fernando Gomez Virgen contra la gefatura política de la capital como ejecutora del acuerdo de la Asamblea Municipal de esta ciudad fecha 4 del presente mes, por el cual "se destituye al Dr. D. Fernando Gomez Virgen del empleo de médico de la municipalidad, por faltas cometidas de irrespetuosidad á la autoridad pública, y por haber manifestado en su comunicacion la notoria incapacidad en que se halla para poder desempeñar sus deberes como médico;" fundándose el recurso en que la asamblea municipal, en un acuerdo privado, sin audiencia del quejoso, le impuso la grande é infamante pena de destitucion del empleo, violándose la garantía que protege el artículo veintiuno de la Constitucion general, por corresponder solo á la autoridad judicial imponer penas, y con las formalidades que requieren la Constitucion general y las leyes secundarias. Visto el auto en que se mandó suspender provisionalmente el acuerdo de la Asamblea Municipal. Visto el informe de la Gefatura política, en el que sin justificar el procedimiento de la Asamblea, fundándolo en el reglamento económico-político ó en otra ley, concluye con los siguientes puntos:

«1º La asamblea municipal ha destituido en uso de su derecho y de su libre administracion á uno de sus empleados que

ella nombró libremente y puede también remover libremente.

2º Esto no importa una pena de las que son exclusivas de la autoridad judicial, si bien algunas veces podrá ser un castigo por falta de cumplimiento de las obligaciones del empleado.

3º No teniendo propiedad en el empleo D. Francisco Gomez Virgen, ni habiendo ley ni convenio que le garantice la duracion de él por término fijo; ninguna garantía ni derecho se le ha violado.

4º De consiguiente, el amparo que por tal motivo se le concediera, sería una tortura á la Constitucion, y un flagrante abuso de la ley sobre amparo que trafia consigo la responsabilidad. Mas como no es de esperarse tal resultado de la cordura é ilustracion del juzgado, concluye pidiendo en nombre de la referida asamblea, se imponga la multa de la ley al Sr. Gomez Virgen por su temeridad en abusar de un recurso tan privilegiado y benéfico, que llegará á caer en desprecio, si no se aplica con la circunspeccion que exige su elevado objeto.»

Visto el pedimento del ciudadano promotor fiscal en el que despues de copiar los cursos é informes presentados en este juicio y en el que se sigue por separado contra la Orden de la Gefatura política, por lo que se suspendió en el empleo al Sr. Gomez Virgen; concluye, sin razonar, con que se deseché el amparo y se imponga la multa correspondiente, fundándose en los artículos setenta y cinco y setenta y seis de la Constitucion del Estado, en las fracciones sétima y novena del artículo 20 del reglamento económico-político de 19 de Marzo de 1869 y artículo diez y seis de la ley general de 20 de Enero del año citado. Visto el alegato presentado por el Sr. Gomez Virgen en el que se amplian extensamente los fundamentos del recurso, y se combate la ligera exposicion del ciudadano promotor fiscal. Visto el auto de citacion para sentencia y todas las demas constancias de autos.

Considerando: que las asambleas municipales no son sino, "unas corporaciones establecidas para la administracion y fomento de los intereses locales de los pueblos, compuestas de los individuos y dotadas de las facultades que determina la ley;" definicion que concuerda con el artículo sexto de la Constitución del Estado.

Que como cuerpos administrativos, las asambleas municipales tiene marcadas sus facultades por el Reglamento Económico político de los Partidos, fecha 5 de Mayo de 1852, declarado vigente por decreto de 6 de Febrero de 1870.

Que en el espresado reglamento, en el capítulo tercero que trata de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, no se encuentra ningun artículo que les conceda la facultad de destituir á sus empleados.

Que en el sistema constitucional toda autoridad tiene sus facultades espresamente marcadas por la ley.

Que la asamblea municipal de esta ciudad al acordar la destitucion del Dr. Gomez Virgen no se fundó en el reglamento ni en otra ley que le conceda espresamente esta facultad, imponiendo una pena propiamente tal, que solo corresponde á la autoridad judicial previo juicio y guardando las prevenciones de los artículos 18 y 19 de la Constitución general, cuyas restricciones forman la garantía que protege el artículo 21 del espresado Código, la cual ha sido violada por el acuerdo de la asamblea de 4 del presente, siendo la destitucion de empleo una pena que reconocen en tal caracter el Código penal vigente, así como las antiguas leyes.

Que no son de tomarse en consideracion las razones de que la asamblea tiene facultad de destituir porque tiene la de nombrar, y que no hay propiedad en los empleos; porque en nuestro sistema constitucional, solo cuando la ley lo establece, el que nombra puede destituir, y siempre con causa justificada; pero no en general y como lo explica la autoridad política en su informe.

TOMO IV.—PARTE II.

Que no se trata en este juicio de la propiedad que tenga el Dr. Gomez Virgen en el empleo, sino de la facultad legal que la asamblea tenga de imponer la destitucion que es una pena, no ejerciendo dicho cuerpo facultades judiciales.

Que por las mismas razones no son de atenderse las que apenas indica el C. Promotor fiscal, fundándose en los artículos 75 y 76 de la Constitución del Estado, y mucho menos, la cita de la ley de 19 de Marzo de 1869, (y no de 19 como dice el C. Promotor) por estar expresamente derogada por la de 6 de Febrero de 1870, declarándose vigente en la misma, la de 5 de Mayo de 1852. Atendiendo: á que las resoluciones en estos juicios, no son ni deben ser generales; que aunque se dirijan contra cualquiera autoridad no se menoscaba la que le conceden la Constitución y las leyes, pronunciándose los fallos sin aprobar ó reprobar los actos reclamados; de conformidad con los anteriores fundamentos, y lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara:

Primero: Que la Justicia de la Union ampara y protege al Doctor D. Fernando Gomez Virgen, contra el acuerdo de la Asamblea municipal de esta Ciudad, que lo destituyó del empleo de médico de la municipalidad, por faltas de respeto á la Jefatura política, por ser la destitucion del empleo una pena y violarse la garantía que protege el artículo 21 de la Constitución general.

Segundo: Se extraña muy seriamente al C. Promotor fiscal por su descuido y falta de estudio en sus pedimentos, y por la continuada desobediencia al acuerdo de la Suprema Corte, fecha 9 de Octubre del año anterior.

Tercero: Remítanse estos autos en revision á dicha Suprema Corte de Justicia, publíquese la sentencia en el periódico oficial del Estado, y sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial. Hágase saber.

El C. Juez de Distrito del Estado así lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Mmanuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Junio 30 de 1873.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Fernando Gomez Virgen profesor en medicina y cirugía, contra el acuerdo de la asamblea municipal de aquella ciudad de fecha 4 de Junio próximo pasado, por el que se destituyó al espresado Gomez Virgen del empleo de médico de dicha municipalidad y ministrador de la vacuna en la misma, con cuya disposicion alega el promovente se ha violado en su persona la garantía consignada en el artículo 21 de la Constitución general de la República. Considerando: que el empleo de médico de la municipalidad y encargo de administrar en ella la vacuna, depende del libre nombramiento que en uso de sus atribuciones hace el municipio, sin conferir tambien por esto el derecho de propiedad en el empleo, lo cual está prohibido respecto de los empleos ó cargos públicos. Que por esta misma razon de no haber propiedad en semejantes empleos, la autoridad que tiene facultad para conferirlos á alguna persona, la conserva tambien para retirarselos cuando lo crea conveniente, á no ser que la ley disponga otra cosa, sin que esto lo ejecute por via de imposicion de pena sino en virtud del derecho propio que para ello tiene de remover á los empleados, y por lo que para destituir á Gomez Virgen no ha necesitado de precisa formacion de causa: que habiendo obrado la municipalidad en virtud de un derecho que le es propio é inherente, no ha agravado el del C. Gomez Virgen, pues como

se deduce de la razon natural y lo enseña la regla 14, tít. 34 parte 7ª: "*Non facit tuerio á otro quien usa de su derecho.*" Que por lo mismo, no es aplicable en el presente caso el artículo 21 de la Constitución general de la República invocado por Gomez Virgen, y en cuyo artículo se refiere esclusivamente á imposicion de penas propriamente dichas ó simples correcciones; resultando en consecuencia, que no ha podido violarse en la persona del quejoso dicho artículo 21, se decreta: Primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada respecto de este juicio por el Juez de Distrito del Estado de Zacatecas en 28 de Junio último, que manda amparar al C. Gomez Virgen contra la providencia de la asamblea municipal de Zacatecas, que lo destituye del empleo de médico cirujano de la misma, y de administrar en ella la vacuna.

Segundo: la Justicia de la Union no ampara ni protege al espresado C. Gomez Virgen, contra el referido acuerdo de la municipalidad de Zacatecas, y contra el que se promovió el presente recurso, por no importar ese acuerdo una violacion del artículo 21 de la Constitución general.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Agosto 14 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.